

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Referencia: 110013335 009 **2018 00351 00**
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
Demandado: Alba Emilia Palacio Rosero

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
LESIVIDAD

(Deniega medida cautelar)

1. Procede el Despacho a resolver la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos, según la parte demandante contenidos en las Resoluciones GNR 135905 del 11 de mayo de 2015 y SUB 49260 del 27 de febrero de 2018 proferida por COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES

2. En el acápite –MEDIDAS CAUTELARES- de la demanda, la apoderada de la entidad solicitó suspender provisionalmente los actos administrativos antes señalados, en los que COLPENSIONES resolvió reconocer e ingresar en nómina una pensión de vejez a favor de la señora Alba Emilia Palacio Rosero.

3. La solicitud de suspensión de los actos administrativos, la sustentó en que no tenía competencia cuando le reconoció, a la señora Palacio Rosero, la pensión de vejez porque la pensionada cumplió los requisitos de edad y tiempo el 24 de mayo de 2009, cuando se encontraba afiliada a la Caja de Previsión Social -CAJANAL EICE Liquidada- hoy UGPP, siendo anterior al 30 de junio de 2009, fecha en la que se consolidó el traslado de los afiliados de CAJANAL al Seguro Social, por lo que explicó que las asignaciones que se hayan causado con anterioridad a esta fecha son competencia de CAJANAL hoy UGPP.

4. Así las cosas, manifestó que COLPENSIONES al haber reconocido la pensión de vejez de la señora Palacio Rosero, causó un detrimento al erario público y a la sostenibilidad del Sistema General de Pensiones.

5. La demandada fue notificada por aviso el 09 de abril de 2019, por lo que el término de los 5 días –inciso 2 artículo 233- para recorrer traslado a la medida cautelar finalizó el 16 de abril de 2019, en el que la señora Palacio Rosero guardó silencio.

6. La Secretaría ingresó el expediente de medidas cautelares, el 29 de abril de 2019 con anotación *"ingresa con el término vencido y en silencio"*.

II. CONSIDERACIONES

7. Se advierte desde ya que la solicitud de suspensión de los efectos de los actos administrativos demandados será denegada, para lo cual previamente se pone de relieve que no se ha cuestionado el derecho de la demandante a obtener la pensión, **con la demanda se discute es la competencia de la entidad que debe definir dicho asunto administrativo**, aspecto que desautoriza la afirmación de que se causó un detrimento al erario público y a la sostenibilidad del Sistema General de Pensiones, porque tanto COLPENSIONES como la UGPP hoy día y antes de su liquidación CAJANAL EICE, tenían patrimonio público, hacen parte del mismo sistema.

8. Contrario a lo anterior, ante el mayor conocimiento que deben tener de sus competencias las autoridades, con equipo de abogados a su servicio, se debe justificar muy bien que a un ciudadano de la tercera edad se le prive de una pensión sin discutir que es merecedora del derecho y sin expresar o proponer una fórmula que no lesione los derechos fundamentales de quien le sirvió al Estado, además de omitir acreditar el respeto del principio del **privilegio de lo previo**.

9. En cuanto a la UGPP, señalada como competente, no se ha pedido su vinculación, no se ha acreditado que se le haya elevado la solicitud, tampoco que si existió debate sobre la competencia entre dicha entidad y la aquí demandante se hubiere definido, menos que fue establecido un conflicto sobre competencia que se llevó y dirimió ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

10. Entonces, de la revisión de los documentos aportados por COLPENSIONES en medio magnético no se verificó reclamación administrativa o petición previa donde le señale a la UGPP la competencia de definir si le debe reconocer la pensión de vejez a la señora Palacio Rosero por encontrarse afiliada con anterioridad 30 de junio de 2009 a CAJANAL; ni aportó una

11. Por lo anterior resulta oportuno recordar el Despacho que por virtud de este reparto de competencias se han presentado múltiples conflictos entre estas dos entidades (UGPP y COLPENSIONES), los que han sido dirimidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, por virtud del artículo 39 del CPACA que dispone:

*<<Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio **o por solicitud de la persona interesada**. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal (...). De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado>>.*

12. Así, COLPENSIONES tampoco acreditó promover el conflicto de competencia. Entonces, pese a que existen actos administrativos que gozan de presunción de legalidad y que definen una situación jurídica particular y concreta que, en principio, pueden ser demandados en esta jurisdicción, lo cierto es que las condiciones que rodean la *litis* permiten inferir que realmente lo que se encuentra por definir no es jurisdiccional, es asunto administrativo, es definir quién tiene competencia, la autoridad administrativa para reconocer el derecho.

13. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado¹, en un caso de similares supuestos fácticos al que aquí se discute precisó:

<<Aunque jurídicamente existe un acto administrativo en firme que concedió inicialmente la pensión, ante la intención de COLPENSIONES de revocarlo por considerar que no era competente para otorgar dicho derecho, y la manifestación de la UGPP de no reconocer la pensión, se evidencia que en el fondo del asunto existe la negativa de estas entidades a ejercer su competencia para resolver lo referente al reconocimiento pensional (...). De esta suerte, encuentra la Sala que se cumplen los requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia para resolver el presente conflicto de competencias, pues: i) Se trata de un conflicto entre dos entidades del orden nacional, COLPENSIONES y la UGPP. ii) La controversia versa sobre el ejercicio de una competencia administrativa en un caso concreto, como lo es la determinación de la autoridad competente para resolver la solicitud de reconocimiento pensional (...). iii) Por último, las señaladas autoridades han rechazado su competencia para resolver dicha solicitud. Igualmente, es importante señalar que la definición del conflicto es necesaria para proteger y hacer efectivos los derechos de la ciudadana, especialmente en una situación en la que se ve inmersa como consecuencia de una actuación de la administración>>.

14. Ahora, para resolver el asunto con la UGPP sin desconocer derechos fundamentales de persona pensionada se le tendría que vincular al trámite satisfaciendo –previamente– los requisitos o presupuestos procesales de los cuales se destaca, en esta ocasión concreta, la **falta de agotamiento de la actuación administrativa**.

15. En efecto, aunque jurídicamente existe un acto administrativo en firme que concedió inicialmente la pensión, ante la intención de COLPENSIONES de revocarlo por considerar que no era competente para otorgar dicho derecho, y sin una **manifestación de la UGPP de reconocer o no reconocer la pensión**, se evidencia que en el fondo del asunto no existe una controversia de estas entidades para ejercer sus respectivas competencias, objeto final de lo pretendido.

16. No se discute lo referente al reconocimiento pensional de la señora Palacio Romero y la medida cautelar le arrebataría el derecho, significando con esto que resultaría más gravoso para la demandada afectarle su derecho a la seguridad social y al mínimo vital suspendiéndole las mesadas pensionales, que dejar sin efectos un acto administrativo que no ha supeditado el conflicto con la entidad que supone es la competente para su reconocimiento pensional.

17. Vistos los anteriores aspectos, el Despacho encuentra improcedente la medida provisional solicitada, en vista de que no evidenció el requisito de apariencia del derecho exigidos por la norma para decretar la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, porque será un tercer sujeto procesal, la entidad UGPP, la que pueda o no asumir aquella responsabilidad de pagar la pensión.

18. Por otra parte, en escrito del 16 de noviembre de 2018 el abogado Mauricio Andrés Cabezas Triviño, presentó renuncia al poder de sustitución junto con la constancia de comunicación a su poderdante (fls.30 a 31), sin que se le hubiere reconocido personería (fl.29), por lo que primero se le reconocerá personería y luego aceptará su renuncia.

19. Se conmina a la parte actora para que promueva el conflicto de competencia suscitado con la UGPP que no puede ser definida por el juzgador, pues ese conflicto tiene como juez natural a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Nulidad y restablecimiento del derecho – lesividad

Radicado: 110013335 009 **2018 00351 00**

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)

Demandado: Alba Emilia Palacio Rosero

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Noveno Administrativo –Sección Segunda- del Circuito Judicial de Bogotá**

RESUELVE

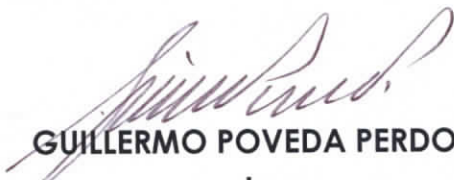
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos GNR 135905 del 11 de mayo de 2015 y SUB 49260 del 27 de febrero de 2018 proferidos por COLPENSIONES, por no satisfacer los requisitos de ley.

SEGUNDO: CONMINAR a la parte demandante COLPENSIONES para que inicie el trámite pertinente y si es el caso que promueva un conflicto de competencia ante la UGPP, debido que no puede ser definida por el juzgador, no es asunto jurisdiccional, ese conflicto tiene como competente, juez natural a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado **Mauricio Andrés Cabezas Triviño** identificado con c.c. 1.019.066.285 de Bogotá D.C., y T.P. 287.801, como apoderado **sustituto** de la parte demandante en los términos y para los fines del poder que obra en el folio 29 del cuaderno 1; y **ACEPTAR** la renuncia a su función.

CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado **Luis Felipe Granados Arias** identificado con c.c. 1.022.970.508 de Bogotá D.C., y T.P.268.988, como apoderado **sustituto** de la parte demandante en los términos y para los fines del poder que obra en el folio 36 del cuaderno 1.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

Nulidad y restablecimiento del derecho – lesividad

Radicado: 110013335 009 **2018** 00351 00

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)

Demandado: Alba Emilia Palacio Rosero

**JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

Miryam Yanneth Martínez Cortes
Secretaria